

en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre de 1983 y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar incluido en zona de preferente localización industrial agraria, la ampliación y perfeccionamiento de referencia, al amparo de lo dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre de 1983.

Dos.—Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto, a efectos de concesión de beneficios de 3.052.292 pesetas.

Tres.—Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1989, programa 712-E: Comercialización, industrialización y ordenación alimentaria, una subvención equivalente al 20 por 100 del presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará como máximo la cantidad de 610.458 pesetas.

Cuatro.—Conceder un plazo hasta el día 31 de octubre de 1989, para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en la realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Cinco.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de mayo de 1989.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias, Fernando Méndez de Andés.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

**19244** *ORDEN de 8 de junio de 1989 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 45.521, interpuesto por doña Antonina Martínez Camarero y otros.*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 21 de febrero de 1989, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 45.521, interpuesto por doña Antonina Martínez Camarero, don Victoriano Aragón Aragón y doña Ana Aragón Aragón, sobre concentración parcelaria, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Guinea Gauna, en representación de doña Antonina Martínez Camarero, don Victoriano Aragón Aragón y doña Ana Aragón Aragón, contra las resoluciones a que se contraen estas actuaciones, debemos confirmarlas por ser ajustadas a derecho; sin expresa condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por la parte recurrente y admitida por el Tribunal Supremo a un solo efecto.

Madrid, 8 de junio de 1989.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

**19245** *ORDEN de 8 de junio de 1989 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 45.921, interpuesto por doña María Corina Paz Rancoño Fernández y otros.*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 13 de marzo de 1989, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 45.921, interpuesto por doña María Corina Paz Rancoño Fernández y otros, sobre concentración parcelaria, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, desestimando la inadmisibilidad de lo alegado y desestimando igualmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Estévez Rodríguez, en representación de doña María Corina Paz Rancoño Fernández, doña Rosario Rancoño Fernández, doña Venancia Rancoño Fernández, doña María Manuela Rancoño Fernández y doña María Emilia Rancoño Fernández, contra las resoluciones a que se contrae este procedimiento, debemos confirmarlas en cuanto a las motivaciones impugnatorias aludidas por ser ajustadas a derecho; sin hacer especial condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por las recurrentes y admitida por el Tribunal Supremo a un solo efecto.

Madrid, 8 de junio de 1989.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

**19246** *ORDEN de 8 de junio de 1989 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 45.573, interpuesto por «Matadero Macor, Sociedad Anónima».*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 20 de marzo de 1989, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 45.573, interpuesto por «Matadero Macor, Sociedad Anónima», sobre resolución de contrato; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Estimar el presente recurso contencioso-administrativo porque los actos administrativos recurridos incurren en infracción del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, debe declarar y declara que los citados actos administrativos no son conformes a Derecho, anulándolos totalmente con las inherentes consecuencias legales. Sin hacer una expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de este recurso jurisdiccional.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 8 de junio de 1989.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

**19247** *ORDEN de 8 de junio de 1989 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 181/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.359, promovido por el Ayuntamiento de Segovia.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 10 de febrero de 1989, sentencia firme en el recurso de apelación número 181/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.359, promovido por el excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, sobre deslinde de vías pecuarias; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación número 181/1987 interpuesto por el Letrado del Estado en la representación que le deviene por Ministerio de la Ley, contra sentencia de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de noviembre de 1986, recaída en el recurso número 44.359, siendo parte apelada la representación del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, por estar ajustada a derecho, sin que proceda hacer una especial condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 8 de junio de 1989.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director de ICONA.

**19248** *ORDEN de 8 de junio de 1989 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.006/1988, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.397, promovido por la Tesorería General de la Seguridad Social.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 22 de marzo de 1989, sentencia firme en el recurso de apelación número 1.006/1988, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.397, promovido por la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre deslinde de vías pecuarias; sentencia cuya parte dispositiva dice así: